



Marzo, 2025

Precios de Transferencia Chile
Transfer Pricing Chile

Recientes cambios regulatorios
Recent Regulatory Developments

Principales cambios de la Ley 21.713

Cambios en materia de Precios de Transferencia a partir del 01.11.2024

El 24 de octubre de 2024, el presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó la Ley N° 21.713, con el objetivo de garantizar el cumplimiento tributario en el marco del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Esta ley introduce modificaciones en materia de precios de transferencia, abordando específicamente los acuerdos anticipados de precios (APAs), aclarando definiciones y conceptos, e implementando mecanismos de autoajuste. Estos cambios entraron en vigor a partir del 1 de noviembre de 2024.

Las principales modificaciones incluyen:

I. Introducción explícita del concepto: Principio de Plena Competencia

Aunque Chile ha seguido las directrices de precios de transferencia de la OCDE, su legislación tributaria nacional previamente no hacía referencia explícita al principio de plena competencia, lo que dejaba margen para interpretaciones en auditorías fiscales y disputas.

Para remediar esta situación, la Ley 21.713 incorporó formalmente el principio de plena competencia en el marco chileno de precios de transferencia. Además, clarificó aspectos clave en la materia al ampliar las definiciones relacionadas con las funciones, activos y riesgos asumidos por las partes, así como las características específicas y los elementos relevantes de las transacciones.

Este cambio fortalece el control fiscal por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), alineando sus regulaciones con los estándares internacionales. Los contribuyentes deben llevar a cabo análisis funcionales y económicos sólidos para justificar sus estrategias de precios de transferencia. No cumplir con estos requisitos podría generar ajustes tributarios, sanciones y posibles riesgos reputacionales.

II. Inclusión explícita del Rango Intercuartil

Anteriormente, la normativa chilena no especificaba un método estadístico para evaluar los resultados en materia de precios de transferencia. Esto podía generar interpretaciones subjetivas en las auditorías de la materia..

Ahora, la Ley 21.713 establece el rango intercuartil como criterio para evaluar si las transacciones intercompañía cumplen con el principio de plena competencia. Si el precio o la rentabilidad de una transacción se encuentra fuera de este rango (entre el primer y el tercer cuartil), se presume que no cumple con las condiciones de mercado. En estos casos, el SII puede ajustar la base imponible hasta la mediana del rango intercuartil.

Este cambio brinda mayor claridad tanto a los contribuyentes como al SII en la determinación de rangos de precios adecuados. Las empresas deben asegurarse de que sus estudios de precios de transferencia reflejen referencias al rango intercuartil para reducir el riesgo de ajustes.

III. Modificaciones en los Acuerdos Anticipados de Precios (APAs)

La Ley 21.713 introdujo varias modificaciones a los Acuerdos Anticipados de Precios (APAs). Desde su aplicación, los contribuyentes pueden llevar a cabo consultas preliminares, conocidas como reuniones previas a la presentación, antes de solicitar un APA. La duración de los APAs se extiende de cuatro a cinco años, y la incorporación de los "APAs retroactivos" permite aplicar los acuerdos de manera retroactiva por hasta tres años fiscales. Además, el plazo de revisión por parte del SII se amplía de seis a 12 meses.

Estas modificaciones brindan a los contribuyentes directrices más claras y mayor flexibilidad para acordar sus APAs. Sin embargo, también indican que el SII podría realizar una revisión más rigurosa de las solicitudes. Los contribuyentes que consideren solicitar un APA deben preparar documentación detallada y anticipar tiempos de procesamiento más largos.

Principales cambios de la Ley 21.713

IV. Posibilidad de Autoajustes

Anteriormente, no existía un mecanismo para realizar ajustes voluntarios de precios de transferencia antes de una auditoría. La Ley 21.713 incorporó el concepto de "autoajustes", que permite a las empresas corregir los precios, valores o rentabilidades de las transacciones entre partes relacionadas antes de ser auditadas por la autoridad tributaria. El objetivo es asegurar que estas transacciones cumplan con el principio de plena competencia, incluso si el monto originalmente reportado entre las empresas vinculadas era diferente. Si existen múltiples precios o márgenes de rentabilidad comparables, las empresas pueden utilizar el rango Intercuartil y ajustarse a cualquier punto dentro de ese rango.

Es importante destacar que estos autoajustes pueden utilizarse solo para incrementar, no reducir, la base imponible, y tampoco pueden emplearse para incrementar las pérdidas tributarias.

Además, estos ajustes de precios de transferencia no afectarán los valores declarados en aduanas en caso de estar relacionadas con importaciones o exportaciones.

V. Expansión del concepto de Reorganización Empresarial

Las reorganizaciones corporativas, como fusiones, escisiones y reestructuraciones de modelos de negocio, a menudo implican la transferencia de activos intangibles valiosos, riesgos y funciones entre entidades. Anteriormente, las leyes fiscales chilenas no definían explícitamente cómo debían tratarse estas transacciones para efectos de precios de transferencia.

La Ley 21.713 amplió el concepto de reorganización empresarial, incluyendo la transferencia de funciones, activos, riesgos y actividades generadoras de ingresos entre empresas dentro de un grupo. A partir de esta legislación, no solo las fusiones y escisiones estarán sujetas a revisión, sino también los cambios contractuales y modificaciones significativas en los acuerdos entre partes relacionadas.

Los contribuyentes involucrados en reorganizaciones deben evaluar si estos cambios alteran sus acuerdos de precios de transferencia. El SII puede examinar más de cerca las reestructuraciones empresariales para garantizar que las asignaciones de beneficios se mantengan en línea con la creación de valor.

VI. Facultad del SII para tasar transacciones intercompañía (domésticas y con el exterior)

Antes de la reforma, la normativa tributaria chilena permitía al SII ajustar el valor de las transacciones cuando determinaba que los precios diferían de las condiciones de mercado. Sin embargo, los criterios para determinar el valor de mercado no estaban claramente definidos.

Con la Ley 21.713, el artículo 64 fue modificado para especificar que el SII puede evaluar las transacciones cuando el precio o valor declarado por el contribuyente difiera de los valores normales de mercado. Adicionalmente, el concepto de "valor de mercado" se define explícitamente como el precio que habrían acordado partes independientes en condiciones comparables.

Este cambio es significativo, porque amplía la fiscalización del SII tanto a las transacciones transfronterizas como a aquellas entre partes relacionadas de un mismo grupo dentro de Chile. Como resultado, para evitar ajustes tributarios las empresas deben asegurarse de que sus transacciones entre partes vinculadas, tanto nacionales como internacionales, se encuentren a valores de mercado. Consecuentemente, se refuerza la seguridad jurídica al establecer directrices más claras sobre la evaluación de transacciones, lo que obliga a las compañías a contar con documentación adecuada y análisis económicos sólidos para mitigar riesgos de auditorías o disputas.

VII. Fiscalización a grupos empresariales

Anteriormente, el SII realizaba auditorías a contribuyentes de manera individual, incluso cuando la entidad formaba parte de un grupo empresarial multinacional o nacional.

La Ley 21.713 introdujo el artículo 59 ter, que otorga al SII la facultad de llevar a cabo auditorías unificadas de grupos empresariales. Ahora, la autoridad tributaria puede revisar de manera conjunta todas las entidades involucradas en transacciones intra-grupo. El proceso de fiscalización comienza con una resolución que notifica a los miembros del grupo que serán sometidos a una revisión coordinada, la que podrá ser realizada por la unidad que supervisa la entidad controladora o por la Dirección de Grandes Contribuyentes.

Dicho cambio fortalece la capacidad del SII para evaluar la sustancia económica de las transacciones intra-grupo y detectar posibles traslados de beneficios. Las empresas multinacionales que operan en Chile deberán garantizar la coherencia en sus políticas de precios de transferencia, ya que el SII analizará las operaciones a nivel de grupo en lugar de enfocarse únicamente en cada entidad individual. Esto podría derivar en un mayor escrutinio sobre las estructuras de la cadena de suministro y los acuerdos intercompañía.

Main Changes under Law 21.713

Transfer Pricing changes from 01.11.2024

On October 24, 2024, the Chilean President enacted Law No. 21.713, aimed at ensuring tax compliance under the Pact for Economic Growth, Social Progress, and Fiscal Responsibility. This law introduces amendments related to transfer pricing, specifically addressing advance pricing agreements (APAs), clarifying definitions and concepts, and implementing self-adjustment mechanisms. These changes are effective starting from November 1, 2024.

Main amendments include:

I. Explicit introduction of the Arm's Length Principle

Although Chile followed OECD transfer pricing guidelines, its domestic tax law did not explicitly reference the arm's length principle, leaving room for interpretation in tax audits and disputes.

Law 21,713 formally incorporates the arm's length principle into Chile's transfer pricing framework. It also clarifies key aspects of transfer pricing by expanding the definitions related to the functions, assets, and risks assumed by the parties, as well as the specific characteristics and relevant elements of transactions.

This amendment strengthens Chile's transfer pricing enforcement and aligns its regulations with international standards. Taxpayers must conduct robust functional and economic analyses to justify their intercompany pricing strategies. Non-compliance could result in tax adjustments, penalties, and potential reputational risks.

II. Explicit inclusion of the Interquartile Range

Previously, Chilean regulations did not specify a statistical method for determining whether transfer pricing results were acceptable. This lack of guidance sometimes led to subjective interpretations in audits.

Law 21,713 establishes the interquartile range for evaluating the arm's length nature of transfer pricing arrangements. If a transaction's price or profitability falls outside this range (between the first and third quartiles), it is presumed to be non-compliant with market conditions. The SII can adjust the taxable base to the median of the interquartile range.

This change provides greater clarity for both taxpayers and the SII in determining appropriate pricing ranges. Companies must ensure their transfer pricing studies reflect interquartile range benchmarks to reduce the risk of adjustments.

III. Enhanced guidance on Advance Pricing Agreements (APAs)

Law 21,713 introduces several key modifications to Advance Pricing Agreements (APAs). It allows taxpayers to hold preliminary consultations, known as pre-filing meetings, before submitting an APA request. The duration of APAs is extended from four to five years, and the introduction of "roll-back APAs" enables the application of agreements retroactively for up to three fiscal years. The review period for the Chilean tax authority (SII) is lengthened from six to 12 months.

These modifications provide taxpayers with clearer guidelines and more flexibility in securing APAs. However, they also signal that the SII may conduct a more rigorous review of APA applications. Companies considering APAs should prepare comprehensive documentation and anticipate longer processing times.

Main Changes under Law 21.713

IV. Possibility of Self-Adjustments

Previously, there was no mechanism for voluntary transfer pricing adjustments before an audit. Law 21,713 introduces the concept of "self-adjustments", which allows companies to make corrections to the prices, values, or profitability of related-party transactions before being audited by the tax authority. The idea is to ensure that these transactions comply with the arm's length principle, even if the originally reported amount between the related companies was different. If there are multiple comparable prices or profit margins, companies can use the interquartile range and adjust to any point within that range. Importantly, these self-adjustments can only be used to increase the taxable base, meaning they can't be used to reduce taxable income or increase tax losses.

Additionally, these transfer pricing adjustments will not affect the values declared in import or export declarations. There will be no need to modify these declared values due to transfer pricing adjustments. This change allows companies to mitigate risks by making voluntary adjustments before facing enforcement actions.

V. Expansion of Business Reorganization Scope

Corporate reorganizations such as mergers, spin-offs, and business model restructurings often involve the transfer of valuable intangible assets, risks, and functions between entities. Previously, Chilean tax laws did not explicitly define how these transactions should be treated for transfer pricing purposes.

Law 21,713 expands the concept of business reorganization to include the transfer of functions, assets, risks, and income-generating activities between companies within a group. Moving forward, not only mergers and spin-offs will be subject to scrutiny, but also contractual changes and significant modifications to agreements between related parties.

Taxpayers engaged in reorganizations must evaluate whether these changes alter their transfer pricing arrangements. The SII may scrutinize business restructurings more closely to ensure that profit allocations remain in line with value creation.

VI. Tax Authority's to Assess Intercompany Transactions (Domestic and Cross-Border)

Before the amendment, Chilean tax regulations allowed the SII to adjust the value of transactions when it determined that prices differed from fair market conditions. However, the criteria for determining market value were not explicitly defined.

With Law 21,713, Article 64 has been modified to specify that the SII can assess transactions when the price or value declared by the taxpayer differs from normal market values. The concept of "market value" is now explicitly defined as the price that independent parties would have agreed upon under comparable conditions.

This change is significant because it extends the SII's scrutiny not only to cross-border transactions but also to those between related parties within Chile. As a result, businesses must ensure that related-party transactions, both domestic and international, comply with market standards to avoid potential tax adjustments. The amendment enhances legal certainty by establishing clearer guidelines on transaction valuations, and companies will need proper documentation and thorough economic analyses to mitigate the risks of audits or disputes.

VII. Audits of Business Groups

Previously, the SII conducted audits on individual taxpayers, even when the entity was part of a multinational or domestic corporate group.

Law 21,713 introduces Article 59 ter, which grants the SII authority to conduct unified audits of business groups. The tax authority can now review all entities involved in intra-group transactions collectively. The audit process begins with a resolution notifying the group members that they will be subject to a coordinated review, which may be carried out by the unit overseeing the controlling entity or the Large Taxpayers Directorate.

This change enhances the SII's ability to assess the economic substance of intra-group transactions and detect potential profit shifting. Multinational companies operating in Chile must ensure consistency across their transfer pricing policies, as the SII will analyze transactions at a group level rather than an individual entity basis. This may lead to increased scrutiny of supply chain structures and intercompany agreements.



© 2024 Grant Thornton Chile. All rights reserved.

Grant Thornton Chile is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a global association. GTIL and the member firms are separate legal entities. GTIL does not provide services under its own name or in any other way. The services are provided by the member firms. GTIL and its member firms do not represent or obligate each other and are not responsible for the acts or omissions of the others.

Av. Presidente Riesco 5335, Of. 603-402, Las Condes. Santiago, Chile.
contacto@cl.gt.com
www.grantthornton.cl